



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, D.E.I. y P., treinta (30) de septiembre dos mil veintiuno (2021).

Radicado	08-001-33-33-006- 2018-00330 -00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y los literales b y c del numeral 1° del artículo 182A del C.P.A.C.A., a efecto que se profiera sentencia anticipada, en los siguientes términos:

II. ANTECEDENTES

DEMANDA

2.1. PRETENSIONES

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se transcriben:

- “1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1° de la Resolución SSPD-2017-8000154985 DEL 2017-09-11*
- 2. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante resolución SSPD-20178000235545 DEL 2017-12-01 únicamente en cuanto confirman la sanción impuesta mediante resolución SSPD-20178000154985 DEL 2017-09-11*
- 3.. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que ELECTRICARIBE no está obligada a pagar el valor de la sanción impuesta mediante las resoluciones mencionadas en los dos numerales anteriores.*

2.2. HECHOS

Al realizar el estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se transcriben los siguientes:

- Que en fecha 17 de abril de 2017, el usuario Luis Nuñez identificado con número NIC 7641320 presentó recurso de reposición ante ELECTRICARIBE S.A bajo el radicado RE111020178606
- Frente al recurso presentado por el usuario, ELECTRICARIBE dio respuesta el día 20 de abril de 2017 de consecutivo 4850115.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

-Para la notificación de la respuesta al recurso, ELECTRICARIBE agotó nuevamente, el trámite dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, enviando la citación para notificación personal día 21 de abril de 2017 por medio de la empresa Lecta con guía 04321056904

-Teniendo en cuenta que el usuario no acudió a la sede de la empresa a notificarse personalmente, el día 02 de mayo de 2017 fue enviada la notificación por aviso por medio de la empresa Lecta con guía 04321092429

- Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos a ELECTRICARIBE y posteriormente la SSPD mediante Resolución SSPD 20178000154985 del 2017-09-11 resolvió:

- Sancionar a ELECTRICARIBE S.A. ESP, con multa consistente en \$14.754.340, catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos.
- Reconocer los efectos del silencio administrativo positivo

- Que mediante Resolución SSPD-S 20178000235345 del 2017-12-01 fue confirmada la Resolución No. SSPD S-20178000154985 del 2017-09-11.

2.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION.

Como fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

❖ Primer cargo:

Infracción de las normas en que deberían fundarse. Violación al principio de legalidad de las faltas y las sanciones contemplado en el artículo 3 del CPACA. El silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación. El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente contempla el silencio administrativo positivo por incumplimiento del plazo para dar respuesta.

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2015 establece que, en materia administrativa sancionatoria, se observará el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones.

La norma con sustento en la cual se impuso la sanción no infringida, al respecto tenemos que únicamente señala:

Artículo 158. Del termino para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación, pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

Se observa que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo únicamente cuando la empresa no da respuesta dentro del término de 15 días.

❖ **Segundo cargo:**

Violación al debido proceso de la empresa por indebida valoración de la prueba al no tener en cuenta la respuesta de la empresa.

En el caso concreto, en la resolución sancionatoria la SSPD señala que sanciona a ELECTRICARIBE por lo siguiente:

“... y la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S. P no probó haber emitido respuesta a la petición objeto de la presente investigación.

Ahora bien, en el presente caso la SSPD sancionó a la empresa Electricaribe bajo una indebida valoración ya que supuestamente no se había dado una respuesta a la petición del usuario, sin tener en cuenta que la empresa si le dio respuesta a dicho derecho de petición, la cual se anexa como prueba, en la presente demanda.

Lo anterior evidencia una falta a la empresa ELECTRICARIBE ya que fue sancionada por la indebida valoración de una de las pruebas presentadas, como lo es la prueba de respuesta al derecho de petición del usuario, situación que a todas luces impide el nacimiento del silencio administrativo positivo.

❖ **Tercer cargo:**

Violación al debido proceso por falta de congruencia entre el pliego de cargo formulado y el hecho por el que se confirma la sanción.

En el caso entre el pliego de cargos y la Resolución confirmatoria hubo falta de congruencia con respecto a las decisiones tomadas, ya que el cargo se formuló por una causal y la resolución confirmatoria terminó confirmando la sanción por otra causal y en base a leyes distintas a las descritas en el pliego de cargos y a las descritas en la resolución sancionatoria.

En el presente caso ELECTRICARIBE presentó descargos contra un pliego de cargos que se formuló por: “presunta violación del artículo 158 de la ley 142 de 1994 el cual fue subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995.”

En el recurso de reposición ELECTRICARIBE presentó pruebas para desvirtuar la sanción impuesta por la resolución sancionatoria por la supuesta no respuesta al derecho de petición.

Pero al final la SSPD confirma la sanción impuesta por lo siguiente:

“Al no haberse acercado el(a) usuario (a) a recibir notificación personal de la respuesta se observa que la empresa procede a notificar por aviso el 02 de mayo de 2017 según consta en la guía de envío de la empresa Lecta allegada con el recurso de reposición, que no cumple con los requisitos de la ley 1369 de 2009.”

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

Como se puede observar ELECTRICARIBE resultó sancionada por hechos nuevos y leyes completamente distintas a los enunciados en el pliego de cargos y en la resolución sancionatoria.

❖ Cuarto Cargo

La SSPD incurrió en falsa motivación cuando concluyó que Electricaribe no cumplió con el envío del aviso de notificación al no cumplir con los requisitos de la Ley 1369 de 2009, el aviso se envió de acuerdo al artículo 69 de la ley 1437 de 2011 y de acuerdo a la misma interpretación que ha dado el Consejo de Estado.

En el presente caso la SSPD sancionó a ELECTRICARIBE S.A porque la prueba de entrega de la notificación por aviso no cuenta con los requisitos de la ley 1369 de 2009. Esta sanción se impuso, sin contar que no es necesario que se acredite la entrega del aviso sino su envío, por lo que no es posible decretar un silencio por ausencia de los requisitos de la Ley Postal. Esto de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Estado en concepto de la sala de consulta y servicio civil bajo radicación 11001030600020160021000 de 04 de abril de 2017.

❖ Quinto Cargo

Falsa motivación: el artículo 69 del CPACA no es aplicable para notificar la respuesta a recursos. La respuesta a recursos se notifica conforme al artículo 43 del Decreto 019 de 2012.

En el presente caso se le exigió a la empresa ELECTRICARIBE el cumplimiento de un trámite no correspondiente como lo es el envío del aviso, envío que a la luz del artículo 43 del Decreto 019 de 2012 no es exigible, por tal razón y en vista a que no se le sancionó en base a los fundamentos normativos correspondientes el silencio administrativo positivo no puede haber nacido a la luz.

❖ Sexto Cargo

Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en el artículo 113 de la ley 142 de 1994.

En la resolución sancionatoria se indicó “contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición (...)” y en la Resolución confirmatoria se indicó “contra la presente resolución no proceden mas recursos por encontrarse agotado el procedimiento administrativo.

❖ Séptimo Cargo

Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el presente caso las resoluciones son nulas en razón a que la SSPD al no haber hecho mención de la procedencia del recurso de apelación, violó de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

❖ **Octavo Cargo**

La SSPD sancionó sin tener en cuenta que los vicios en la publicidad de los actos administrativos no generan ni la inexistencia ni la invalidez de los mismos.

Los vicios de notificación de los actos administrativos no surgen en el procedimiento para su producción o formación, sino en el procedimiento para su comunicación, pues por medio de esta lo que se procura es que el acto administrativo que se trate produzca finalmente los efectos que se encontraba llamado a producir.

2.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.4.1. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa envió la citación al(a) usuario(a), el día 21 de abril de 2017 (ver fl.02 recurso), a través de la empresa LECTA, es decir dentro del término oportuno.

Teniendo en cuenta que no fue posible la entrega, se evidencia en el caudal probatorio que la empresa procedió a realizar la publicación de la citación en la sede de la misma, el día 02 de mayo de 2017, con fecha de desfijación el 08 de mayo de 2017 (ver fl.03 de recurso), tal y como lo señala el artículo 68 ídem.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a enviar el aviso el 02 de mayo de 2017 según consta en la guía de envío de la empresa de mensajería Lecta allegada con el recurso de reposición (ver fl.04 recurso), que no cumple con los requisitos de la Ley 1369 de 2009.

Asimismo, se evidencia en el caudal probatorio que reposa en el expediente, que la empresa publica el aviso en un lugar de acceso público de la entidad el 09 de mayo de 2017 y lo desfija el 15 de mayo de 2017 (ver fl.05 recurso), sin embargo, no cumplió con el requisito de publicar en página web.

Al analizar el caudal probatorio que reposa en el expediente, observa el Despacho que la empresa no cumplió con el requisito de publicar en la página web. En este sentido se tiene que debe entenderse que se desconoce la información sobre el destinatario y por ende se puede proceder a la publicación del aviso, en los términos de Ley, no solamente cuando no se cuente con la dirección, número de fax o correo electrónico del administrado, sino también cuando el inmueble se encuentre cerrado, el aviso sea devuelto por la empresa de correos argumentando que el destinatario ya no vive en el lugar o la dirección sea errónea o inexistente.

Se debe publicar el aviso, además, en todos aquellos eventos en los que el operador jurídico no logre surtir la notificación por aviso ya sea porque los datos suministrados por el interesado estén incompletos, no es posible la entrega del aviso.

2.5. ALEGATOS

Electricaribe E.S.P S.A, presentó alegatos de conclusión dentro del término legal ratificando los cargos propuestos con la demanda, al igual que la Superintendencia de Servicios Públicos quien presento alegatos de manera oportuna ratificando los argumentos propuestos en la contestación de la demanda y en las excepciones.

2.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio público no emitió pronunciamiento dentro presente proceso.

III. TRAMITE PROCESAL

- La demanda fue presentada el 17 de agosto de 2018, repartida a esta Judicatura en esa misma fecha, y admitida mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2018.
- Surtidos los trámites de notificación, la demanda fue contestada por la Superintendencia mediante escrito de fecha 03 de julio de 2020.
- De las excepciones propuestas, se corrió traslado mediante fijación en lista.
- Mediante auto de fecha 17 de junio de 2021 de conformidad a lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la realización de la audiencia inicial, se incorporaron pruebas y se fijó el litigio.
- Mediante auto de fecha 08 de julio de 2021, se ordena correr traslado para alegar a las partes.
- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso al Despacho en estado de dictar sentencia.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. Validez de la actuación.

Revisadas las actuaciones procesales, no observa este Juzgado irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

4.2. Problema jurídico: El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar, si los actos acusados están inmersos en causal de nulidad, de acuerdo a los cargos propuestos en el escrito de demanda, al haberse sancionado a ELECTRICARIBE S.A E.S. P, por la configuración del silencio administrativo positivo.

Lo anterior pasa por determinar lo siguiente:

Si los trámites de notificación realizados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar por aviso la respuesta del recurso presentado por el usuario Luis Alfredo Núñez, se ajustaron a lo dispuesto en las normas que regulan la materia (artículo 159 de la Ley 142 de 1994 y artículos 67, 68 y 69 del C.P.A.C.A.), en el entendido que la falta de notificación de la respuesta ocasiona el silencio administrativo positivo, origen de la sanción a la prestadora de servicios públicos.

4.3. Tesis del Juzgado: En el presente asunto, el Despacho sostendrá la tesis que, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar respuesta al recurso realizado por el usuario Luis Núñez, incumplió con las formalidades establecidas en el inciso primero

del artículo 69 del C.P.A.C.A para la notificación por aviso, generándose el silencio administrativo positivo, motivo de la sanción, por lo tanto los actos demandados no se encuentran incurso en las causales de nulidad alegadas.

4.4. Marco jurídico.

➤ 4.4.1. Del Silencio Administrativo Positivo en Materia de Servicios Públicos Domiciliarios:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios”, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, consagra el silencio administrativo positivo en los siguientes términos:

“Artículo 123. Ámbito de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo, contenida en el artículo. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la superintendencia de servicios públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto. Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario”.

De la norma en cita, se colige que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, están obligadas a resolver las peticiones, quejas y recursos que sean presentadas por los usuarios, dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación, so pena de configurarse el silencio administrativo positivo, entendiéndose que lo solicitado ha sido resuelto en forma favorable, el cual deberá reconocer sus efectos dentro de las (72) horas siguientes.

➤ Sobre la delegación de funciones administrativas.

A partir de la Constitución Nacional y del contenido del artículo 9º, 10º y 11º de la Ley en cita, 489 de 1998, el Honorable Consejo de Estado en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00, realizó acertadas conclusiones sobre la figura de la delegación de funciones que ahora hace suyas este Despacho, así:

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

1. La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello (artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998).

2. La delegación administrativa implica: i) el ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante; ii) que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y, iii) la existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

3. Se concluye así que la Ley 489 de 1998 consagra como cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y cuando no figuren en el artículo 11 de esa misma Ley.

➤ **Sobre la notificación de decisiones administrativas de entidades prestadoras de servicio público domiciliario.**

El artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual se refiere al tema de la notificación de las decisiones sobre peticiones y recursos, preceptúa:

"Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.

Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.

Parágrafo. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia"

Bajo la anterior premisa normativa, es necesario remitirse a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en materia de notificaciones, que son del siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. *Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

4.5. Caso Concreto.

Con la demanda de la referencia, Electricaribe, solicita la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

a) Resolución SSPD S-20158200105305 del 14 de julio de 2015 expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que impuso multa equivalente a \$6.443.500 en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrarla culpable de la ocurrencia de silencio administrativo positivo en relación con petición que le realizó la usuaria Belkin Guerra.

b) Resolución SSPD-S 20158200282045 del 23 de diciembre de 2015, expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución sanción.

4.5.1. Análisis crítico de los cargos frente a las pruebas y premisas normativas.

Primer Cargo de Nulidad // Infracción de las normas en que deberían fundarse. Violación al principio de legalidad de las faltas y las sanciones contemplado en el artículo 3 del CPACA. El silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación. El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente contempla el silencio administrativo positivo por incumplimiento del plazo para dar respuesta

Manifiesta la empresa accionante que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo, únicamente cuando la empresa no da respuesta a la respectiva solicitud dentro de los 15 días siguientes a ésta.

No obstante, lo anterior, indica Electricaribe, que en los actos acusados se le impone sanción por supuesta ocurrencia de silencio administrativo positivo, sin atenderse que cumplió con su obligación de responder la solicitud dentro de los 15 días referidos.

Valorado el cargo en estudio, precisa el Juzgado que el mismo no ostenta vocación de prosperar.

La tesis anterior, tiene fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que se desarrollan a continuación:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, impone a las empresas destinatarias de la norma, como Electricaribe S.A. E.S.P. la obligación de responder los recursos, quejas y peticiones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del recurso, queja o petición.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

La misma norma contiene una sanción para los casos en que la empresa no cumpla con la obligación de responder dentro del término aludido, dicha sanción consiste en que frente a la omisión de la empresa se entiende configurado un silencio administrativo positivo a favor del peticionario.

Al respecto, así reza la norma en cita:

“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él”.

Ahora bien, analizado el tema respecto al trámite de respuesta y notificación de la misma por parte de la entidad administrativa, para la configuración del silencio administrativo, sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en sentencia de 13 de septiembre de 2017, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. N° 05001-23-31-000-2011-00984-01 (21514) sostuvo:

“3.1 El silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, a la falta de decisión de la administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados, se le da un efecto que puede ser negativo o positivo. Ese efecto se conoce como acto ficto o presunto pues, aunque en tales eventos no exista una decisión expresa que contenga la voluntad de la administración frente al asunto que ha sido sometido a su consideración, la ley le da al silencio de la administración unos efectos similares a los del acto administrativo expreso. La razón de ser del fenómeno del silencio administrativo es la de evitar que los asuntos que la administración debe resolver queden sin decidir de manera indefinida.

3.2 Existen algunas diferencias entre los efectos del acto ficto negativo y del acto ficto positivo. Una de ellas es que mientras que la ocurrencia del silencio negativo no impide que la administración se pronuncie sobre el asunto, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, la configuración del silencio positivo genera un acto presunto que tiene que ser respetado por la administración.

*3.3 Ahora bien, para que se configure el fenómeno del silencio positivo se deben cumplir tres requisitos i) que la Ley le haya dado a la administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc. ii) que la Ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo (en nuestro ordenamiento, la regla general es el silencio negativo); iii) que la autoridad que estaba en la obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal, respecto de este último requisito, ha dicho la sala que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma.”
 (Negrita y subrayado fuera del texto)*

En ese sentido de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, es completamente claro que en el aludido trámite de respuesta se encuentra inmersa la notificación, que debe realizarse dentro del mismo término de los 15 días hábiles señalados en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, entendiendo que la sola expedición del acto o respuesta en sí,

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

no es suficiente para el cumplimiento o resolución de la petición, toda vez que el espíritu de la norma es precisamente que el usuario efectivamente sea depositario de una respuesta concreta y de fondo, contra la cual si es menester pueda interponer los recursos de Ley o controvertir, y la sola redacción de la respuesta sin la debida publicidad o notificación vulnera el derecho al debido proceso y defensa que tiene el usuario, escenario por el cual se establece la sanción del silencio administrativo positivo como mecanismo para contrarrestar y equiparar las cargas existentes entre la empresa prestadora del servicio y el usuario.

Respecto al tema de la notificación, tenemos que artículo 158 de la ley 142 de 1994, si bien establece el término en el cual deben resolverse las quejas y peticiones, no indica la forma en que deben notificarse las respectivas respuestas. Esa forma de notificación se encuentra regulada en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.

Véase entonces, como la misma Ley que la parte actora utiliza para fundamentar el presente cargo, para efectos de notificación de la respectiva respuesta, remite a la Ley 1437 de 2011.

Conforme lo anterior, nótese como existe integración normativa entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación, so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo, que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el trámite de notificación, dentro de los términos que la ley otorga para ello. Todo lo cual se contrapone al argumento soporte de este cargo de nulidad, el cual, por las mismas razones se declara impróspero.

Segundo Cargo // Violación al debido proceso de la empresa por indebida valoración de la prueba al no tener en cuenta la respuesta de la empresa.

Como quiera que la sanción fue impuesta por la configuración del silencio administrativo positivo en la actuación administrativa, por cuanto no dio respuesta en el término señalado en artículo 158 de la ley 142 de 1994. Aduciendo que la respuesta fue emitida dentro del término, pero no se pueden tomar los errores en la notificación como falta de respuesta.

Sin embargo, en las resoluciones atacadas la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios afirma que, si bien la respuesta fue emitida dentro del término legal, no realizó la notificación en debida forma, configurándose con ello el silencio positivo. Toda vez, que a la empresa investigada le asiste el deber de emitir la respuesta al igual que de notificar en debida forma, dentro del término de ley, a efectos que el derecho de los usuarios se encuentre satisfecho.

En esa medida, es claro para el Despacho que los actos demandados no fueron expedidos con violación al debido proceso, sino que la Superintendencia de Servicios Públicos, hace una aplicación adecuada de la norma referida, ajustada a los lineamientos jurisprudenciales, que le sirvió de fundamento para proferir la decisión cuestionada.

En ese orden de ideas es necesario señalar que, dentro de la actuación administrativa adelantada ante la SSPD, una vez presentados los descargos por parte de la empresa sancionada, con los mismos no se allegó ningún tipo de prueba documental, por lo cual la

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

entidad toma la decisión de sancionar, en primera medida mediante Resolución SSPD 20178000154958 del 2017-09-11. Ahora bien, una vez presentado el recurso de reposición frente a la referida resolución, se allegó como material probatorio la respuesta emitida, sin embargo teniendo en cuenta que la sanción impuesta se fundamenta en la ocurrencia del silencio administrativo positivo, es deber del ente de control, verificar no solo que se haya proferido la respuesta, sino revisar el procedimiento de notificación de la misma, frente a lo cual se tuvieron en cuenta las pruebas documentales aportadas por la empresa de servicios públicos, y así quedó evidenciado en la valoración realizada en el acto administrativo que confirma la sanción dentro del cual en ningún momento se desconoce la falta de respuesta, pero si se evidencia vicios en el proceso de notificación que conllevan a la configuración del silencio administrativo positivo.

Tercer cargo// Violación al debido proceso por falta de congruencia entre el pliego de cargo formulado y el hecho por el que se confirma la sanción.

El presente cargo no tiene vocación de prosperidad, pues, el principio de tipicidad como integrador del de legalidad como parte del derecho administrativo sancionador, permite que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable, a partir de otras normas jurídicas, como en efecto se establece en el acto administrativo demandado. Lo anterior indica, que las conductas o comportamiento que constituyen falta disciplinaria o administrativa no tienen por qué estar descritos con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, imponiendo por consiguiente un criterio de mayor flexibilidad y menor rigurosidad en la adecuación típica, siendo éste uno de los matices predicables en el derecho administrativo sancionador diferente del penal.

En efecto, haber establecido en el pliego de cargos como incumplidas algunas normas específicas, no impide que se acuda a otro cuerpo normativo al momento de imponer la sanción, como lo hizo la entidad accionada puesto que lo reglado por dicha norma guarda íntima relación con el cargo investigado en sede administrativa, que no es otro que la presunta conducta de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. que devino del Silencio Administrativo Positivo, al no acreditar la constancia de notificación por aviso en los términos, forma y con los requisitos indicados en la normativa aplicable al caso.

Cuarto Cargo // La SSPD incurrió en falsa motivación cuando concluyó que Electricaribe no cumplió con el envío del aviso de notificación al no cumplir con los requisitos de la Ley 1369 de 2009, el aviso se envió de acuerdo al artículo 69 de la ley 1437 de 2011 y de acuerdo a la misma interpretación que ha dado el Consejo de Estado.

Respecto del cargo de falsa motivación, se fundamenta en que no es obligación de la empresa Electricaribe en una actuación administrativa acreditar el recibo del aviso, sino solo su envío, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 68 y 69 del CPACA, y que, en esa medida la Superservicios profiera la sanción argumentando que las pruebas de entrega no cumplen los requisitos señalados en la ley postal, como es la identificación del receptor, conllevando dicha omisión una indebida notificación, ésta incurre en una falsa motivación de los actos acusados.

En principio para el Despacho es claro que, el silencio administrativo positivo, de acuerdo a lo señalado en la norma y jurisprudencia previamente citada, se configura cuando el peticionario no recibe respuesta en el término señalado en el artículo 158 de ley 142 de

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

1994, esto es 15 días desde la petición. Teniendo en cuenta que, en este plazo no solo debe emitirse la decisión sino notificarse en debida forma, por lo tanto, el no acreditar la emisión y el envío de la respuesta dentro del término señalado por la norma, trae como consecuencia la configuración del silencio administrativo positivo. Tal como se consideró en un aparte en el acto acusado.

No obstante, la decisión sancionatoria acusada no tuvo fundamento central en la extemporaneidad de la notificación de la decisión, sino en la irregularidad presentada en el trámite de notificación.

Siendo ésta una postura a favor del investigado, en razón a que la Superintendencia en la valoración probatoria independiza del término de los 15 días del art. 158 L.142/94, la emisión de la respuesta y el trámite de notificación, examinando el cumplimiento del debido trámite de notificación de la respuesta, obviando el hecho que al ser expedida el mismo día del vencimiento de los 15 días de que trata el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, la notificación posterior al vencimiento de dicho término, en el presente asunto devino extemporánea, tal como se concluye de lo dispuesto por el Consejo de Estado¹:

Ahora bien, para que se configure el fenómeno del silencio positivo se deben cumplir tres requisitos: i) que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc.; ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo (en nuestro ordenamiento, la regla general es el silencio negativo); y iii) que la autoridad que estaba en la obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal. Respecto de este último requisito, ha dicho la Sala que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma.”.

Ahora bien, no es de recibo para el Despacho, lo aducido por la empresa Electricaribe al señalar que, en una actuación administrativa no es su deber acreditar el recibo del aviso, sino solo su envío, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 68 y 69 del CPACA, y que, en esa medida, Superservicios incurre en falsa motivación de los actos acusados, al considerar que no hay una debida notificación cuando la prueba de entrega no cumple los requisitos señalados en la ley postal.

Es menester señalar que, la regla que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo. Como quiera que al ser el ordenamiento jurídico un sistema, la coherencia y unidad se califican como sus características. Esto implica, que las disposiciones propuestas, se contrastan con otras normas consonantes con el asunto tratado, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante.

En esa medida, para hacer la valoración adecuada del trámite de notificación en el proceso administrativo de Electricaribe, es menester constatar que el usuario en efecto haya conocido la respuesta emitida por Electricaribe y esto solo puede acreditarse en

¹ Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en sentencia de 13 de septiembre de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. No. 05001-23-31-000-2011-00984-01 (21514)

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

observancia a que las comunicaciones se hagan mediante correo certificado, y que dicho correo cumpla con lo dispuesto en la ley 1369 de 2009, para certificar que el envío y recibo de la correspondencia se hizo de manera efectiva y en los casos de notificación, se haya surtido en debida forma.

Pudiéndose concluir que, el silencio positivo se configura de conformidad en lo dispuesto en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, y en concordancia con los artículo 69 y 69 de la ley 1437 de 2011, cuando el peticionario no recibe respuesta en el término señalado en la ley, por lo tanto la prueba de entrega del aviso, enviado por correo certificado² debe cumplir con los requisitos señalado en la ley 1369 de 2009, en virtud de una interpretación sistemática de la norma, para dar la certeza de una debida notificación dentro del término dispuesto, siendo el número de identificación de quien recibe el aviso, una de ellas. Sin esta acreditación no es dable determinar la entrega del aviso dentro del término legal. En esa medida, para esta judicatura, el acto sancionatorio y el que lo confirma se encuentra debidamente motivado.

Quinto Cargo // Falsa motivación: el artículo 69 del CPACA no es aplicable para notificar la respuesta a recursos. La respuesta a recursos se notifica conforme al artículo 43 del Decreto 019 de 2012.

La aplicabilidad de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, no son de carácter residual, y por el contrario surgen por remisión expresa de la norma especial como lo es artículo 159 de la Ley 142 de 1994, la cual fue transcrita en el acápite anterior, y que no desarrollaremos nuevamente, sin embargo, es necesario señalar que no existen contradicciones entre las dos normas citadas, por su parte el artículo 43 del Decreto 019 del 2012 establece lo siguiente:

- *ARTÍCULO 43. NOTIFICACIONES. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, notificarán la decisión sobre los recursos interpuestos por los usuarios en desarrollo del contrato de condiciones uniformes, mediante comunicaciones que se enviarán por correo certificado o por correo electrónico en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De ello quedará constancia en el respectivo expediente. (subrayado fuera del texto)*

Realizando de igual manera remisión expresa a la ley 1437 del 2011 en materia de notificaciones, empero para zanjar de manera definitiva la discusión nos debemos remitir al artículo 5º de la Ley 57 de 1887 que estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial, prefiere a la que tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que, si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior deroga una ley anterior, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 57 de 1887.

En ese orden de ideas la normatividad aplicable en materia de notificaciones de los actos administrativos, o empresariales de las empresas prestadoras de servicios públicos será en todo caso los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 del 2011, teniendo en cuenta la remisión que realiza la Ley 142 de 1994 que se encuentra revestida de mayor especialidad y por

² Según lo dispone el artículo 43 del decreto 019 de 2012

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

su jerarquía normativa al ser una ley de la República, y prevalecerá en todo caso frente al decreto 019 del 2012, por lo cual se declara impróspero el presente cargo de nulidad.

Sexto Cargo // Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en el artículo 113 de la ley 142 de 1994.

Manifiesta ELECTRICARIBE S.A E.S. P, que se vulneró su derecho al debido proceso, al no haberse manifestado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos la procedencia del recurso de apelación contra los actos administrativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho entrará a estudiar los preceptos normativos y hará las siguientes precisiones:

ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.

Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.

Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar. (Negrita y subrayada fuera del texto)

El principal argumento señalado por el demandante dentro del presente cargo se fundamenta en la delegación realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin embargo al analizar el fundamento de esta figura encontramos que está consagrada en el artículo 211³ de nuestra Carta Política la cual es desarrollada mediante la ley 489 de 1998, que consagra como cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y que no se encuentren expresamente regulados en el artículo 11 de esa misma Ley.

Por lo cual la delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello. En ese orden de ideas de acuerdo a lo preceptuado por el Consejo de Estado la delegación administrativa implica⁴:

³ "Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios".

⁴ CONSEJO DE ESTADO en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00,

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

- i) El ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante;
- ii) Que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y,
- iii) La existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

El cargo de nulidad que propone Electricaribe S.A. E.S.P. lo fundamenta en el hecho de que en las Resoluciones acusadas no se le otorgó la posibilidad de interponer recurso de apelación a pesar de que el artículo 113 de la Ley 142 de 1994⁵ preceptúa que cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación y las mencionadas resoluciones acusadas fueron expedidas en virtud de Delegación realizada al Director Regional Norte de la Superintendencia por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Al respecto, el despacho se permite precisar que los actos administrativos acusados, por ser parte del ordenamiento jurídico colombiano, deben someterse a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 como clausula general en torno a la delegación de funciones administrativas.

En esta medida, se hace imperante dar aplicación a la Ley 489 de 1998 al presente caso, máxime cuando el objeto controvertido en este cargo de nulidad es procesal administrativo, referente a la procedencia de recurso de apelación de un acto administrativo expedido en virtud de delegación, escenario en el cual debe atenderse ineludiblemente a la cláusula general que regula la materia, esto es la Ley 489 de 1998.

Sumado a lo anterior, tenemos que, para efectos del ejercicio de las funciones delegadas la Ley 489 de 1998 cobra carácter especial, en tanto que dicha Ley **(i)** regula el ejercicio de la función administrativa y fija las reglas básicas del funcionamiento de la Administración Pública, pero también, tiene como fuente a **(i)** los artículos 209 y 211 de la Constitución Política que regulan a la delegación administrativa.

De conformidad a lo señalado, desciende nuevamente el Juzgado sobre los asuntos tratados en el presente fallo, encontrando que las decisiones del Director Territorial Norte de la Superintendencia, al no conceder la procedencia del recurso de apelación se encuentran sujetas a derecho, y respetan la regulación normativa aplicable a la materia, en tanto que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, como cláusula general de la delegación administrativa, preceptúa que a los actos expedidos por el delegatorio le serán procedentes los mismos recursos procedentes por el delegante, que en este caso es el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios cuyos actos administrativos no son susceptibles de ser apelados.

⁵ "Artículo 113. Recursos contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones administrativas. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.

Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.

Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar".

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

Además de la normatividad señalada anteriormente, se deberá aplicar de igual manera de forma sistemática con el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, que consagra:

ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

- 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.*
- 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.*

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. (negrita y subrayado fuera del texto)

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

- 3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.*

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.

Concluyéndose con todo lo señalado anteriormente, que en materia de recursos contra los actos administrativos expedidos por los delegatarios la normatividad aplicable es el artículo 12 de la ley 489 de 1998; así las cosas, tal cargo no tienen vocación de prosperidad.

Séptimo Cargo// Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

A consideración del demandante las resoluciones acusadas son nulas en razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no realizó mención de la procedencia del recurso de apelación, violando de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud del análisis concreto realizado frente al sexto cargo de nulidad, en el cual se estudió la procedencia del recurso de apelación frente a los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, el despacho no da lugar al presente cargo propuesto, toda vez que al no existir la posibilidad legal y procesal de interponer recurso de apelación, tampoco surge la obligación para la entidad autora del acto administrativo de conceder o señalar en el mismo acto, recursos que resulten improcedentes, y podría verse expuesto el funcionario a sanciones de tipo disciplinarias y penales, en ese sentido el despacho desecha el presente cargo por no encontrarse soportado legalmente y no encontrar prosperidad del mismo.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

Octavo Cargo // La SSPD sancionó sin tener en cuenta que los vicios en la publicidad de los actos administrativos no generan ni la inexistencia ni la invalidez de los mismos.

Manifiesta la empresa accionante que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo, únicamente cuando la empresa no da respuesta a la respectiva solicitud dentro de los 15 días siguientes a ésta.

No obstante, a lo anterior, indica Electricaribe, que en los actos acusados se le impone sanción por la supuesta ocurrencia de silencio administrativo positivo, sin tenerse en cuenta que cumplió con su obligación de responder la solicitud dentro del término de los 15 días referidos.

Valorado el cargo en estudio, precisa el Juzgado que no ostenta vocación de prosperar.

La tesis anterior, tiene fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que se desarrollan a continuación:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, impone a las empresas destinatarias de la norma, como Electricaribe S.A. E.S.P. la obligación de responder los recursos, quejas y peticiones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del recurso, queja o petición.

La misma norma contiene una sanción para los casos en que la empresa no cumpla con la obligación de responder dentro del término aludido, dicha sanción consiste en que frente a la omisión de la empresa se entiende configurado un silencio administrativo positivo a favor del peticionario.

Ahora bien, dicho artículo 158 de la ley 142 de 1994, si bien establece el término en el cual deben resolverse las quejas y peticiones, no indica la forma en que deben notificarse las respectivas respuestas. Esa forma de notificación se encuentra regulada es en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.

Véase entonces, como la misma Ley que la parte actora utiliza para fundamentar el presente cargo, para efectos de notificación de la respectiva respuesta, remite a la Ley 1437 de 2011. Bien, dicha Ley 1437, en cuanto a las notificaciones.

Conforme lo anterior, teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el envío de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente.

4.5.2. Conclusión.

Una de las características de los actos administrativos acusados es la presunción de legalidad, lo que concordado con el art. 167 del C.G.P), impone a quien pretende la

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

nulidad de dichos actos administrativos, la carga de demostrar la ocurrencia de los cargos de nulidad que proponga en contra de esos actos.

Pues bien, en el presente caso se evidenció que ninguno de los cargos propuestos por Electricaribe S.A. E.S.P. tuvo vocación de prosperar y se declararon no probados, por lo que la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos acusados se encuentra incólume, esto es, no fue desvirtuada.

En este panorama menester es negar todas las pretensiones de la demanda de la referencia, lo cual se hará en la parte resolutive de esta sentencia.

V. CONDENA EN COSTAS

Finalmente, el Juzgado no condenará en costas, en razón de que la parte vencida no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el Juzgado Sexto (06) Administrativo Oral de Barranquilla**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR, conforme a la parte motiva de esta sentencia, todas las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: Sin en costas en esta instancia.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la Señora Procuradora delegada del Ministerio Público antes este Juzgado.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ
Juez

L.P.V

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 006 Administrativa
Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9819ad46a1019ae4ddc3afe0902125b093dd23189e1a3cc40e9c11dd9b160907**
Documento generado en 30/09/2021 06:08:11 PM

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00330-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>